

LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA: ASPECTOS TEORICOS Y ANALISIS DE LA SITUACION CHILENA*

Paulo Hidalgo

Investigador Visitante
Fundación Pablo Iglesias

PRESENTACION

Utilizando una analogía musical, este trabajo analiza por medio de varios «movimientos» la temática de la transición a la democracia. En primer lugar, ubicamos la discusión en los parámetros actuales en torno a los sentidos que adquiere la noción democrática. Allí hacemos una referencia a los trabajos pioneros sobre transiciones hacia *modus vivendis* democráticos de Schmitter, O'Donnell y Whitehead y señalamos algunos puntos críticos. A continuación, el trabajo se centra en el caso chileno. Se aborda la configuración sociopolítica del país y los elementos básicos del derrumbe democrático. Los rasgos más peculiares del régimen militar que se instala en 1973 y el proyecto de refundación nacional que se propone. A partir de allí se consideran los rasgos más relevantes de la descomposición del régimen militar y los procesos que permitieron una franca transición a un régimen democrático. En ese apartado se consideran las herencias fundamentales que debe asumir el gobierno libremente elegido, es decir, el escenario económico, social y político. El último movimiento intenta una muy breve comparación de Chile con Grecia, Portugal y España, motivados por un trabajo reciente de José María Maravall. Finalizamos señalando algunos de los desafíos que presenta la sociedad chilena para afirmar sin ambigüedades una sociedad democrática a futuro superando las entropías históricas.

* Agradezco los comentarios a una primera versión de este trabajo a Ana Rico y Víctor Sampedro.

1. INTRODUCCION

La progresiva apertura de los clásicos canales de participación política (medios de comunicación plurales, elecciones democráticas, creación de una opinión pública, restitución de canales de representación social, etc.) plantea un sinnúmero de interrogantes y reflexiones en torno a la reconstrucción del orden político en el país. ¿Qué ha ocurrido con el sistema de partidos políticos luego de quince años de encierro autoritario?; ¿en qué grado se han mantenido incólumes o se han modificado las identidades políticas profundas de los grupos y diversos sectores sociales del país? Estos interrogantes, y otros de esta relevancia, de creciente recurrencia en la amplia gama de investigaciones sociopolíticas existentes, han tenido como premisa central el tema del conjunto de características que reúne una sociedad plenamente democrática. Esta preocupación, de carácter normativo, se ha conceptualizado básicamente en dos sentidos: por un lado, como forma de ordenamiento institucional; es decir, el equilibrio y regulación entre los poderes del Estado, el rol del parlamento y del presidente de la república, la clara diferenciación entre roles técnicos y políticos en el interior del gobierno, etc. Por otro lado, la noción de democracia también se ha comprendido como una forma de sociabilidad; es decir, como el anhelo por buscar formas genuinamente participativas de toma de decisiones y deliberación colectiva en todos los ámbitos de la sociedad. De allí la verdadera explosión de preocupaciones por el denominado poder local y las diversas experiencias de autogestión cooperativa apoyadas, en parte, por toda una red de instituciones no-gubernamentales¹.

Es así como la problemática democrática actúa como un verdadero eje, ordenador de temas, desplazando las obsesiones intelectuales a lo menos de un sector significativo del mundo académico que antaño se referían a la eventualidad de efectuar cambios radicales en la sociedad o a una preocupación monotemática por la «dependencia» externa, considerada en su versión quizá más extrema (André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos) como la responsable primordial del subdesarrollo del continente. Las dictaduras militares de nuevo cuño instaladas en la década de los setenta en el cono sur de América Latina causaron no sólo una debacle de todo el entramado institucional de las respectivas sociedades, sino también una aguda puesta en tela de juicio a todas las certidumbres que en ese momento presidían los debates intelectuales.

El quiebre radical que tuvo lugar en Chile sepultando una interesante y compleja experiencia de un gobierno de izquierda que accedía al poder por medios electorales, tuvo sin duda un impacto internacional de proporciones. Tanto las reflexiones de Berlinguer en Italia y su

¹ Entre otros, se pueden citar los trabajos de Angel Flisfisch, *La política como compromiso democrático*, Flacso, Chile, 1987; Norbert Lechner, que tiene preocupaciones más centradas en los elementos subjetivos de la democracia; por ejemplo, *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política*, Flacso, Chile, 1988; Norbert Lechner (ed.), *Cultura política y democratización*, Flacso, Clacso, ICI, Chile, 1987.

búsqueda de sellar un compromiso histórico con la Democracia Cristiana como luego la experiencia del llamado Eurocomunismo tuvieron como antecedente o referente crítico la experiencia política de Chile.

Todo este proceso político estuvo además acompañado por una paulatina creación de lazos intelectuales y puesta en común de ideas y problemas entre comunidades de académicos vinculados a las Ciencias Sociales tanto de Europa, del mundo anglosajón, como de América Latina. La paradoja residía en que mientras los académicos latinoamericanos eran perseguidos y expulsados de los centros de enseñanza e intentaban muy precariamente reconstruir una identidad y repensar su propio quehacer, y la desorganización social circundante, los lazos internacionales se hicieron más fuertes y los puntos de vista se hicieron relativamente más compatibles y homogéneos.

Los estudios en torno a las razones profundas que explicaban la quiebra de los regímenes democráticos, el tipo de arreglo democrático que había prevalecido por décadas, sus limitaciones e insuficiencias, los rasgos sociopolíticos de las dictaduras militares, sus proyectos de transformación de la sociedad, se tornaron en las preocupaciones centrales de científicos sociales de las más diversas latitudes. Aquí hay que añadir, por cierto, la temática cardinal de las transiciones de regímenes autoritarios a *modus vivendis* democráticos. Para muchos de nosotros ya son una lectura clásica, y como tal siempre recurrente, los volúmenes (realmente pioneros en más de algún sentido) tanto de creación propia como compilados de Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (eds.), *Transitions from authoritarian rule*, que aparecen en 1986. Ellos señalan una veta de trabajo o punto de inflexión que influyó en forma determinante *a posteriori* en todo el repertorio analítico y en la orientación más básica del cúmulo de preguntas e investigaciones que nos hemos propuesto en los últimos años. Como todo punto de partida seminal o fundacional, las discusiones más acaloradas o los intentos de ruptura de jóvenes intelectuales más iracundos —como siempre— han tenido como paso obligado y referencia conflictiva los trabajos de Schmitter y O'Donnell.

Entre otros, el gran mérito de estos autores es la crítica que se lleva a cabo de las concepciones estructural-funcionalistas de los procesos de cambio social. Ellos logran demostrar en forma muy convincente de qué modo la democracia, tanto a nivel institucional como cognitivo, se presenta más bien como un resultado de una compleja panoplia de opciones y dilemas políticos más que como un conjunto de precondiciones (niveles de urbanización, educación, desarrollo económico, etc.). Es la restitución de esta capacidad de elección racional de los actores que se inclinan por determinadas estrategias políticas, inmersos en ordenamientos políticos con peculiaridades propias en cada país, lo que se cierne como el gran atractivo de los análisis de los citados investigadores.

Sin embargo, el escaparse de una lógica unidimensional «macro» puede tener como contrapartida el adjudicarle un repertorio amplio a los actores sociopolíticos dejando en la sombra que siempre opera una dialéctica o juego complejo entre esa capacidad de acción y condicionantes o límites elementales que a la hora de pensar en la reconstrucción de órdenes democráticos en algunos países resultan en verdad de primera magnitud. Nos referimos, por ejemplo, a los escasos márgenes de maniobra en países en crisis económicas ingentes en donde los rangos de acción son casi unívocos: se trata de «salvar» la casa y los muebles. El relativo descuido de la variable económica, a mi juicio, representa una debilidad de los trabajos mencionados. En el mismo sentido, el énfasis en las dinámicas propiamente políticas —en particular a la luz de la comparación de países con ritmos de desarrollo variados— no da cuenta de lo que sucede en la propia sociedad. En algunos países de la región latinoamericana uno de los talones de Aquiles de la política es precisamente su incapacidad secular para integrar en el orden político a sectores significativos de la población. Descentrar las claves que nuclean a amplios sectores sociales en sociedades sincréticas, sus símbolos y ritos colectivos, ya se han convertido en temas de investigación con un *status* teórico respetable en las Ciencias Sociales de América Latina y de otros lugares. De nuevo, la contracara de esta línea de trabajo es imaginar y pensar únicamente a la sociedad «desde abajo». Esto lleva a menudo a visiones reduccionistas y románticas que elaboran argumentos antiinstitucionales y apologías prometeicas de las capacidades de organización de los colectivos sociales.

Este trabajo pretende ser un ejercicio de análisis de la transición a la democracia en Chile. Al desarrollar la argumentación idealmente quisiéramos plantear temas de debate y algunas referencias aún preliminares a las experiencias de las nuevas democracias del sur de Europa, es decir, Grecia, Portugal y España. En primer lugar, a modo de telón de fondo bosquejamos los aspectos centrales de la configuración política de la sociedad chilena y los rasgos más característicos del derrumbe democrático. En segundo lugar, hacemos un breve *excursus* sobre las peculiaridades del régimen militar y proyecto de transformación societal. En tercer lugar, nos detenemos con mayor detalle en la transición política, la situación económica, las mutaciones en la estratificación social y los cambios en el sistema de partidos. Por último, examinamos algunos de los problemas pendientes que la sociedad chilena deberá resolver en el largo plazo. Allí intentamos en pinceladas realizar algunas comparaciones con los casos de Europa del Sur ya mencionados.

2. PRIMER MOVIMIENTO: CONFIGURACION Y DERRUMBE DEMOCRATICO

Chile, en comparación con otros países del continente latinoamericano, ha contado con un sólido sistema de partidos que históricamente fue el mediador privilegiado entre el Estado y la sociedad. Para comprender adecuadamente esta afirmación el paso obligado es situarse en las coordenadas de desarrollo de la sociedad chilena. En efecto, lo que en otros contextos latinoamericanos se verificó de manera asincrónica, en Chile se dio simultáneamente; es decir, un proceso de industrialización sustitutiva (mercado-internista según Ludolfo Paramio), la existencia por un largo período de un régimen político democrático con un proceso de democratización sustantiva que permitió unos grados de participación ampliados. Como lo han demostrado algunos notables historiadores políticos², la democratización chilena no fue un proceso unilíneal y armónico, sino que consistió en una incorporación gradual de diversos sectores sociales a la ciudadanía económica, social, cultural y política que se efectuaba en forma mediatizada, segmentada, conflictiva —con marchas y retrocesos— en función de la efectiva capacidad de organización y presión sobre el Estado, que a la postre se erigía en el único referente de la acción colectiva.

En esta trama, el sistema de partidos y la clase política que le era consustancial configuraban el instrumento privilegiado para acceder al Estado, y el único puente para que los diversos sectores sociales se tornaran en actores de relevancia nacional. Así, la singularidad política del país consistía en el entrelazamiento, solapamiento o imbricación que se verificaba entre élite política-partido y grupo social³.

Es posible destacar ciertos rasgos positivos de esta particular estructura política. En primer lugar, su notable estabilidad. Sin abundar en mayores detalles, la longevidad del sistema político chileno se explica en gran medida por una temprana —según cánones latinoamericanos— formación del Estado que se asienta ya en 1830 sobre la base de la hegemonía de la oligarquía agraria del valle central. Además, el ente estatal cumple un papel clave en la canalización y distribución de los recursos económicos. A él se irán integrando otras facciones oligárquicas, tanto sectores medios —el Partido Radical— como representantes del artesanado y del embrionario movimiento popular —el Partido Demócrata—. En la década de los treinta se incorporarán al Estado socialistas y comunistas y, más tarde, la Democracia Cristiana. A esto hay que añadir el profundo arraigo originario de los partidos, que no son meras

² Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Ed. Universitaria, Chile, 1986; Sergio Villalobos (compilador), *Historia de Chile*, Ed. Universitaria, Chile, 1990.

³ Manuel Antonio Garretón, *El proceso político chileno*, Flacso, Chile, 1983; Arturo Valenzuela, *The breakdown of democratic regimes-Chile*, John Hopkins University Press, 1978.

entelequias de notables gestadas desde las alturas. Chile configura, como se sabe, formas de representación si se quiere marcadamente clasistas. La izquierda comunista (1922) nace en la zona del puerto de Valparaíso y del norte minero, teniendo como caldo de cultivo la existencia de un proletariado que vive en condiciones de un capitalismo salvaje en comunidades cerradas, lo que les hace generar un fuerte sentido de identidad y de oposición. El Partido Radical (1858) nace como una escisión temprana de corte jacobino de la oligarquía ilustrada —una división del partido liberal— y que más tarde nuclea a los sectores medios de origen estatal. El Partido Socialista (1933) recoge a un amplio movimiento de capas medias, universitarios y trabajadores de la capital y otras ciudades importantes durante la crisis del 30, etc. Es quizá solamente en la derecha donde existe un cierto déficit de representación política en tanto siempre hubo una tensión irresuelta entre intereses corporativos a corto plazo y fallidas elaboraciones de proyectos sociopolíticos de mayor envergadura⁴.

En suma, la sociedad chilena a partir de la década del 30, en particular con el acceso al gobierno del Frente Popular (1938), exhibe un alto grado de integración. Se trataba, en definitiva, del predominio de un sistema de partidos que presenta una oferta ideológica «completa». Es decir, había una derecha, un centro y una izquierda, lo que permitía una efectiva ubicación de la ciudadanía en algún punto del espectro. Aquí no sucedió el complejo fenómeno del populismo que, como un movimiento político amorfo, heteróclito, transclase, se agotaba en la energía y carisma de un gran caudillo nacional. La masa campesina era la gran excluida del arreglo político chileno y la derecha mantenía en el parlamento un gran poder de veto y tutela sobre este sector social a la vez que desarrollaba, como ya se dijo, una política de corte eminentemente defensivo.

Esta configuración política con el correr del tiempo mostró claros signos de desgaste. Se hicieron patentes algunas debilidades originarias, como determinados cambios en el campo y las orientaciones de las fuerzas políticas, que conducen finalmente al derrumbe de la democracia chilena. Esto merece algunas precisiones históricas.

El primer gran ciclo del sistema de partidos en Chile se cierra con la experiencia caudillista del General Carlos Ibáñez, que se prolonga de 1952 a 1957. El era un militar que había tenido presencia en la escena política durante la crisis salitrera (década del 20) y la depresión del 30, como una de las figuras más descollantes (junto a Marmaduke Grove, uno de los fundadores del Partido Socialista) de un estamento militar de oficiales jóvenes descontentos con la estrechez de la sociedad oligárquica y en búsqueda de alternativas ante el vacío político de aquel entonces. En los cincuenta, este líder que reemerge se propuso recoger cierto hastío social que estaba en fermentación, derivado del

⁴ Tomás Moulian, *Desarrollo político y estado de compromiso. Desajuste y crisis estatal en Chile*, Estudios Cieplan, n.º 8, Chile, 1982.

hecho de que la actividad política fuera canalizada exclusivamente por los partidos políticos que eran crecientemente percibidos como cliques estrechas. En particular, se devalúa la imagen del Partido Radical que aparece carcomiendo y utilizando prebendariamente al aparato del Estado. Junto a esto se hacen cada vez más claros los endémicos cuellos de botella del modelo económico, que acusa signos de agotamiento. Ya a estas alturas el estancamiento de la agricultura, como una suerte de bastión feudal de la clase terrateniente, era insostenible. El énfasis en una política de sustitución de importaciones descuidó la posibilidad de ampliar y diversificar las exportaciones, generando de este modo un alto grado de estrangulamiento en la balanza de pagos. Únicamente el cobre cubría cerca del 70% de las remesas de divisas del país. Las presiones inflacionarias afectaron duramente el nivel de vida de la población; entre 1952-55 el ritmo de aumento anual de los precios al consumidor pasó del 12 al 86%.

De este modo, el tema principal de Ibáñez durante la campaña presidencial, ante este panorama que se describe, fue precisamente su ataque a los partidos señalados como incapaces de representar a crecientes sectores sociales y de resolver los ingentes problemas económicos del país. Sin embargo, la gestión de Ibáñez, que se presenta como un gran salvador nacional, fracasa rotundamente. Políticamente es incapaz de articular «desde arriba» el desencanto con el sistema político histórico, como efectivamente ocurrió con los populismos clásicos de Perón o Getulio Vargas. Su gobierno se caracterizó por un marcado erratismo e ineficiencia que lo llevaron a aplicar indistintamente tanto políticas de corte estatista, liberal —con un efímero plan recomendado por la famosa misión Klein Sacks, que es desechado rápidamente por el empresariado a la luz de los «sacrificios» que requería— como orientaciones izquierdizantes y de derecha. En buenas cuentas, Ibáñez no abordó coherentemente las limitaciones estructurales de la modernización incompleta de los gobiernos frente-populistas, tales como enfrentar el atraso agrario, la dependencia externa de un solo producto y el imperativo de una reforma económica global que desactivara los bloques económicos ya señalados, entre otros rezagos acumulados.

Luego del «vendaval» ibañista reaparece el sistema partidario con mutaciones importantes⁵. Se asiste a un paulatino debilitamiento del centro político representado en el Partido Radical, cuya flexibilidad histórica hacia los dos polos del espectro partidario permitía el equilibrio del sistema político. El centro es ocupado progresivamente por la Democracia Cristiana, que se caracteriza por un alto grado de rigidez y doctrinarismo, lo que la lleva a esgrimir un proyecto político propio devaluando las alianzas políticas. Este conglomerado obtiene en 1945 un 2,57% de los votos, y en 1949, un 3,92%. El gran repunte se produce en 1957 cuando logra un 9,94% de los votos, y un 15% en Santiago —la

⁵ Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón (eds.), *Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del cono sur*, Flacso, Chile, 1989.

capital—, que consagra el liderazgo tanto partidario como nacional de Eduardo Frei, que es elegido Senador. Luego en las elecciones presidenciales de 1964 Frei obtiene una de las votaciones más altas de la historia política del país, un 55,7% de la votación. Por otra parte, se consolida una izquierda con un creciente peso electoral; en 1958 obtiene un 28,51% de los votos y, más tarde, en 1964 un 37,7% de los sufragios, es decir, más preferencias que en 1970, cuando accede al gobierno. Estos resultados refuerzan en la izquierda la elaboración de una política que aspira a la formación de un «gobierno popular» desechando toda posibilidad de establecer alianzas políticas. En su versión más radicalizada, la conquista del gobierno era percibida como un proceso ininterrumpido hacia la instauración del socialismo. Por último, ante este cuadro de crecimiento de las alternativas reformistas y progresistas se genera un creciente anquilosamiento de la derecha, que se atrincheró aún más a la vez que opta por una política de «mal menor», apoyando en su momento (1964) sin condiciones a alternativas políticas como la Democracia Cristiana, que bloquearán a toda costa un triunfo de la izquierda. La derecha se refunda en 1962, con la fusión de corrientes nacionalistas e históricas, y comienza a elaborar una visión agresiva de la «democracia de los compromisos» que se había venido gestando en Chile, y gradualmente construye un proyecto político con claros signos autoritarios.

Como lo demuestra la descripción precedente, el cuadro partidario que cristaliza en Chile presenta elementos evidentes de polarización. Si se pudiera expresar esta situación de manera gráfica, es plausible aducir que a comienzo de los sesenta dejó de existir cualquier iniciativa estable y orgánica de cooperación política. El período de las denominadas «planificaciones globales», como lo acuñó un historiador clásico⁶, comprendió el intento de desarrollar dos programas presidenciales que en verdad se proponían cambios ambiciosos y de largo alcance, sin las mayorías y el consenso político necesarios: el de Eduardo Frei entre 1964 y 1970, —la «revolución en libertad»— y el de Salvador Allende entre 1970 y 1973—«la «vía chilena al socialismo»—. Estos signos de deterioro del sistema político, evidentes en una exacerbada invasión de la pura lógica político-partidaria en la sociedad, un maximalismo ideológico flagrante y un desencuentro sin retorno de las diversas fuerzas políticas, fueron el telón de fondo del colapso. Es preciso añadir a estos fenómenos los procesos vividos durante los tres agitados años de la Unidad Popular que terminaron de minar el terreno para cualquier acción política racional: la existencia de una movilización social extrema de carácter confrontacional, una marcada desarticulación de la sociedad —descomposición capitalista—, una derechización de claros tintes fascistas y encono de las capas medias, un sabotaje abierto y desembozado de las clases empresariales, etc.

⁶ Mario Góngora, *op. cit.*, tercera parte.

3. SEGUNDO MOVIMIENTO: REGIMEN MILITAR Y PROYECTO DE REFUNDACION NACIONAL

Es ya un lugar común indicar que las intervenciones militares durante la década de los setenta en el cono sur de América Latina tenían un doble carácter. Por un lado, contaban con una clara intención «reactiva» en contra de lo que se percibía como una amenaza popular que ponía en riesgo los pilares mismos de la organización social. Por otro, había una motivación «fundacional» o de búsqueda de una reorganización de la sociedad sobre nuevas bases.

A la luz del grado de confrontación y descomposición generalizada a que había llegado la sociedad chilena, ambas dimensiones de la intervención militar en este país alcanzaron grados de profundidad inéditos. El desmantelamiento del «antiguo» sistema de partidos, la búsqueda de una depuración política y la persecución y exterminio de los derrotados no tuvo parangón con la experiencia de otros países. También la voluntad fundacional fue quizá la más marcada y sistemática de todos los ensayos militares de esa década. Chile sufrió cambios radicales y sin retorno en un lapso de tiempo muy reducido, experiencia que en otros países bajo regímenes democráticos puede tomar varias décadas⁷.

La dirección política o, si se quiere, el núcleo hegemónico en el poder, fue en el caso chileno extremadamente coherente, sistemático y homogéneo. Este núcleo estaba integrado básicamente por dos componentes.

Por una parte, estaba el liderazgo jerárquico y personalizado simbolizado en la figura de Augusto Pinochet. Este asegura su liderazgo personal en varias etapas. En primer lugar, por la vía jurídico-institucional, esta figura militar reúne los cargos de Comandante en Jefe del Ejército, luego el de Jefe de la Junta de Gobierno (cabeza institucional del Estado) y más tarde se erige en Presidente de la República, situación que se consagra con la aprobación de la Constitución Política de 1980. De igual manera, Pinochet afianza su liderazgo centralizando en el Ejército, y prácticamente bajo su mando, los aparatos represivos de las Fuerzas Armadas cuando se le otorga un poder omnímodo a los servicios de seguridad, conocidos primero como DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y luego como CNI (Centro Nacional de Informaciones). Por último, Pinochet simplemente llama a retiro o aniquila a los generales «pares» de su generación que podían constituir una amenaza a su liderazgo. El General Carlos Prats es asesinado en Buenos Aires, el General Oscar Bonilla muere en extrañas circunstancias en un accidente de helicóptero. Simultáneamente, Pinochet

⁷ Puede parecer repetitivo, pero me tocó trabajar como investigador asistente en ese período, en particular en la elaboración bibliográfica de los trabajos del libro de Manuel Antonio Garretón, *Dictaduras y democratización*, Flacso, Chile, 1984.

promueve a generales de una cohorte generacional anterior a la suya, generando de este modo una lealtad irrestricta a su persona. Por último, neutraliza la emergencia de un liderazgo competitivo en las otras ramas de las Fuerzas Armadas. La salida aparatosa del General Gustavo Leigh, jefe máximo de la rama aérea en 1977, es una prueba muy clara de la voluntad política de imponerse por cualquier medio de parte del General Pinochet.

Por otra parte, estaba el núcleo tecnocrático encargado del manejo estatal de la economía, que se hizo públicamente conocido como el «equipo económico» o los *Chicago boys*, debido a que una gran mayoría de ellos habían sido entrenados en la escuela de economía de esa universidad bajo una estricta formación neoliberal, a cargo de Milton Friedman y Arnold Harberger. Resulta interesante destacar que este estamento de economistas emergió, por así decirlo, «desde dentro» del Estado y no de la derecha política histórica. La trayectoria de la formación de este grupo está documentada ampliamente en un libro notable, de reciente aparición, en donde se estudian minuciosamente los vínculos que se establecen, a comienzos de la década de los sesenta, entre la Escuela de Economía de la Universidad Católica y la Universidad de Chicago para promover la gestación de una élite que introdujera este pensamiento económico en la sociedad chilena y que fuera ocupando gradualmente los puestos de importancia tanto en los medios de comunicación de mayor influencia y prestigio como en lugares de poder. De este modo, éste era el único grupo disponible en Chile después del golpe que estaba a la espera de su gran oportunidad para aplicar sus recetas⁸.

Como se sabe, los militares en Chile, como en el resto de los otros casos del continente, no contaban con un proyecto de sociedad tangible que poner en práctica más allá de la tristemente célebre Doctrina de Seguridad Nacional que tematizaba de modo casi paranoide una repulsa anticomunista que era enarbolada para «limpiar» a la sociedad de aquellos elementos considerados enfermos (como diría antológicamente el General Leigh, en Chile la misión de las Fuerzas Armadas consistía en «extirpar el cáncer marxista»). De este modo, los *Chicago boys* encajaron perfectamente, debido a que le ofrecieron al liderazgo personalizado en la figura de Pinochet un proyecto omniabarcante de sociedad que contaba, por un lado, con una faceta ideológica de crítica acérrima a la sociedad que se había construido en Chile desde la década de los treinta y, por otro, una propuesta coherente de transformación de la sociedad chilena. El modelo de desarrollo que en definitiva pusieron en práctica, sin los «estorbos» de la existencia de un sistema de deliberación democrática, y bajo férreas condiciones autoritarias, se puede resumir en los siguiente puntos: 1) Apertura indiscriminada

⁸ También tuve la oportunidad de colaborar en la investigación que dio origen a este libro de Juan Gabriel Valdés, *La Escuela de Chicago: operación Chile*, Grupo Editorial Z, Argentina, 1989.

de la economía al exterior. Se sostenía que la economía chilena tenía que competir con el exterior sin ninguna protección artificial y de acuerdo a sus «ventajas comparativas». 2) Una reorientación drástica del aparato productivo hacia el sector terciario y primario (la reconversión de la agricultura en agroindustria). 3) Una amplia liberalización del mercado financiero —es decir, una libre circulación de los flujos internacionales de capitales—. 4) Una drástica reducción del tamaño del sector público y una masiva privatización de las empresas públicas tradicionales. Además, no era un punto menor el que adicionalmente esta élite tecnocrática le asegurara a las Fuerzas Armadas en su conjunto un presupuesto militar alto y un flujo sistemático de financiación externa, dadas las conexiones de estos economistas con las entidades de créditos internacionales, en un momento en que el aislamiento político del régimen militar chileno era casi absoluto.

Junto al paquete de medidas precedentes, se ponen en marcha sobre todo a partir de 1977 un conjunto de denominadas «modernizaciones» en las más diversas esferas sociales. La primera fue una muy radical reformulación a la legislación laboral que básicamente regulaba las afiliaciones sindicales de manera voluntaria en las empresas, mientras que dictaba la posibilidad de crear una multitud de sindicatos, y establecía reglas para negociaciones colectivas por empresa, otorgándole amplias prerrogativas a la parte patronal (como la contratación de personal alternativo, el recurso al *lock-out* cuando los dueños lo estimaren conveniente y la posibilidad de reducir personal arbitrariamente cuando las necesidades de la empresa lo hicieran necesario, etcétera).⁹ Los mismos principios de libre mercado fueron sistemáticamente puestos en práctica en las áreas de salud, educación, seguridad social. El principio rector consistía en retirar totalmente de esas esferas al Estado en tanto agente regulador y otorgarles absoluta primacía a los grupos privados que estaban en mejores condiciones de competir, es decir, aquellos con mayores recursos económicos. En cada esfera se debilitaron, y finalmente se eliminaron, todas las organizaciones representativas que podían convertirse en la parte litigante en eventuales conflictos sociales. Más adelante veremos los efectos que este cúmulo de transformaciones tuvo en la estructura social.

Por otro lado, se verifica un acelerado proceso de institucionalización política. En parte por efecto de la presión internacional, debido a la sistemática violación de los derechos humanos, así como por la convicción de la élite civil que acompaña a Pinochet sobre la necesidad de fijar un conjunto de reglas del juego que coronaran con una legitimidad legal-racional tanto el liderazgo de Pinochet como los enormes cambios a nivel de la sociedad y la estructura económica. Pinochet y su Junta de Gobierno designan una comisión encargada de redactar una

⁹ En Chile ha sido un éxito editorial el relato que hace José Piñera de la reforma laboral que estuvo a su cargo cuando ejerció como Ministro de Trabajo del régimen militar; se trata de *La revolución laboral en Chile*, Ed. Zig-Zag, Chile, 1990.

nueva Constitución, conocida como «Comisión Ortuzar». Este nuevo cuerpo legal es aprobado en un plebiscito de dudosa legitimidad democrática realizado en 1980. En general, se establece una democracia tutelada o vigilada que excluye a los partidos de inspiración marxista, se crea un Consejo de Seguridad Nacional que cuenta con una capacidad decisiva de veto, que está compuesto por los jefes de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y otras personalidades consideradas de prestigio (expresidentes y miembros de la Corte Suprema). Simultáneamente, se le confieren amplios poderes a Pinochet por un lapso de ocho años que tiene que ser refrendado en un plebiscito para que éste continuase en el gobierno por un período similar. Esta Constitución se pone en vigencia en marzo de 1981 y marca el apogeo de la era pinochetista.

Sin embargo, al año siguiente, a mediados de 1982, se produce el colapso de uno de los grupos económicos de mayor envergadura en el país (el grupo Crav) que puso al descubierto la extrema debilidad del modelo económico que se había implantado hasta ese momento. Este año se produjo una profunda crisis económica. Después de las arengas triunfales del gobierno, esta honda crisis evidenció la creciente concentración de capitales que se había generado, los enormes niveles de especulación, endeudamiento externo y desmantelamiento del aparato productivo nacional, que señalaron la irresponsabilidad de los sectores financieros y grupos económicos al realizar inversiones mal proyectadas y concebidas.

Las tasas de desempleo subieron a un 30%. Hubo una caída global de la producción del orden del 20 al 25%. Como veremos más adelante, el Estado tuvo que entrar directamente a «salvar» de la quiebra a los clanes económicos más poderosos, en particular al sistema financiero. Para efectos de análisis, y para su focalización en la transición, retomaremos la dimensión económica más adelante como una parte clave del escenario que encuentra el nuevo gobierno democrático.

Siguiendo con la argumentación central, es fundamental destacar que esta primera gran debacle económica fue el desencadenante de los primeros síntomas reales de crisis del gobierno militar, que abrieron cauce para una reanimación de la oposición democrática. Hubo signos evidentes de resquebrajamiento en el gobierno con la convocatoria a integrar el gabinete en calidad de Ministro del Interior a Sergio Onofre Jarpa, un antiguo político de la derecha tradicional. Este integra en el Ministerio de Economía a Luis Escobar Cerda, que busca erráticamente poner en práctica algunas políticas de corte populista sin modificar radicalmente el modelo económico.

Sin duda, lo más singular de este período es la súbita irrupción en 1983 de las denominadas «protestas sociales». Se trató de la emergencia del primer movimiento realmente de masas desde el golpe militar de 1973, que agrupó a sectores medios y clases populares habitantes de los sectores más empobrecidos de la ciudad. La llamada que hiciera el líder máximo de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Rodolfo Seguel (de filiación Demócrata-Cristiana), a protestar en contra del

régimen prendió como un reguero de pólvora. A una hora convenida, según una señal que daba la única radio tolerada de oposición (Coope-
rativa), se creaba en todas las casas, golpeando con cualquier objeto, el mayor ruido posible. En los sectores más modestos esta forma de protesta tomó un cariz más violento de amotinamiento, y en algunos casos de abierta rebeldía social, en particular de contingentes juveniles frustrados (en su gran mayoría desempleados) que tomaban las calles causando destrozos y provocando fogatas. En esos años muchos pensaban visceralmente que el régimen estaba a punto de colapsar: el grito típico era «Y va a caer...». La primera coalición opositora que se gesta en estos años está constituida por la Democracia Cristiana, por una parte sustancial del Partido Socialista y por otros sectores menores —la Alianza Democrática— que, en ausencia de una cierta propuesta transicional, exigían la renuncia inmediata de Pinochet, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la constitución de un gobierno de transición. En la versión más radical, el Partido Comunista, que desde 1980 había optado «por todas las formas de lucha» (incluida la vía armada), junto con un sector socialista, llamaban a un paro nacional indefinido que llevaría al derrumbe del régimen y a la instalación de un gobierno provisional¹⁰.

Sin embargo, fue necesario el paso de varios años para que se desencadenara un genuino proceso de transición a la democracia, una vez que se reunieron algunas condiciones indispensables atingentes a este tipo de transformaciones sociopolíticas.

4. TERCER MOVIMIENTO: LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA. ESCENARIO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO

En marzo de 1990, después de un prolongado interregno militar, asume el gobierno democrático Patricio Alwyn, de filiación Demócrata-Cristiana, que encabeza una coalición de centro-izquierda, básicamente junto al Partido Socialista, ya repuesto de sus luchas intestinas y reunificado en un solo tronco.

Es menester afirmar desde un comienzo que el pilar político fundamental sobre el cual descansa la transición política en Chile es el acuerdo sustantivo que se logra entre aquellos sectores políticos —ya mencionados— que se enfrentaron duramente durante prácticamente tres décadas: el centro político Demócrata-Cristiano y una parte sustancial de la izquierda representada por el Partido Socialista. Se debe agregar que el Partido Comunista, aunque no participa en la coalición política, también se adhiere y llama a su militancia a votar por el candidato único de la oposición democrática, aunque tardíamente y desgarrado por pugnas internas y mediando una radicalización de sus juventudes.

¹⁰ Paulo Hidalgo, *Pasado y presente de los partidos de izquierda. Un ensayo interpretativo*, CED, Chile, 1985.

Es casi un lugar común señalar que en Chile la transición fue en parte posible porque la oposición democrática elaboró un conjunto de pactos o entendimientos básicos para llevar al país a la democracia. Si se quiere, esto se llevó a la práctica pagando determinados costos, pero logrando beneficios indudables que han encaminado al país por una senda de democratización gradual. Tales pactos se pueden sintetizar esquemáticamente en cuatro puntos elementales¹¹:

1) Pacto constitucional. Esta fue la certidumbre de la oposición luego de enconadas discusiones sobre la imposibilidad de un cambio de régimen político sin reconocer la Constitución de 1980, junto con la legalidad edificada por el régimen militar que se plasmaba en este mismo cuerpo legal. Esto llevó a la oposición a nuclearse primero alrededor de la denominada «Concertación por el NO». Es decir, la campaña masiva que desplegó la oposición primero para inscribir en los registros electorales a la mayor cantidad de votantes y luego para realizar una campaña promoviendo a la ciudadanía a votar NO en el plebiscito convocado por el régimen militar para ratificar por otro período de ocho años el mandato del General Pinochet. Este evento electoral se realizó el 5 de octubre de 1988. La oposición democrática triunfó con un 56% de los sufragios y la opción «SI» (por la permanencia de Pinochet por ocho años) logró un 44% de votos. Este fue el acto desencadenante de la transición política.

2) Pacto o acuerdo partidista. Esta fue la etapa de pasar de una coalición muy puntual e inestructurada a una coalición de corte más permanente, con ciertas normativas de funcionamiento y acuerdos más desagregados. Se fundó la Concertación de Partidos por la Democracia que proponía a Patricio Alwyn para la elección presidencial del 14 de diciembre de 1989, como se adelantó al comienzo de este apartado. Este obtuvo un 55,2% de los votos; el candidato del régimen militar, Hernán Buchi, obtuvo un 29,40%, y Francisco Javier Errazuriz, un empresario exitoso que se lanza de improviso a la arena política con un discurso de corte populista, logra un 15,43% de los sufragios.

3) Pacto electoral y de gobierno. Esto significó un complejo trabajo político de doble orientación. De un lado, acordar la repartición de las diputaciones y senaturías en juego a través de una dilatada negociación, dado que el sistema electoral heredado del régimen militar forzaba a un bipartidismo y, por ende, a crear dos grandes coaliciones para lograr captar la mayor cantidad de votos posibles. Por otra parte, un amplio espectro de comisiones profesionales y técnicas, que conformaron un verdadero gabinete en la sombra, elaboraron un programa de gobierno que contemplaba medidas destinadas a democratizar plenamente el país (democratizar la gestión municipal), resolver de la mejor manera la terrible herencia de la violación de los derechos humanos y

¹¹ José Joaquín Brunner, «Chile. Claves de una transición», *Leviatán*, n.º 40, verano 1990.

aliviar mediante ciertas reformas (laboral y tributaria) algunos problemas sociales acuciantes tales como falta de servicios mínimos, salarios deprimidos y desempleo. Se debe consignar que en el período que media entre el plebiscito y la elección presidencial se acordaron entre el gobierno militar saliente y la oposición democrática triunfante una serie de reformas a la Constitución votadas en un referéndum *ad hoc* que a lo menos amortiguó los aspectos más autoritarios que aún le afectan: permanencia del General Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército, existencia de senadores designados, inamovilidad de la mayoría de los alcaldes del país, existencia del Consejo de Seguridad Nacional.

4) Pacto en torno a las claves del desarrollo del país. Se refiere a ciertos acuerdos a más largo plazo en torno al imperativo de la mantención de una economía abierta, con una fuerte inversión privada tanto nacional como extranjera, y a reconocer el papel central del mercado —en consonancia con una readequación del rol del Estado— como asignador de recursos. En suma, desde un comienzo se aplacó o desactivó cualquier amenaza al funcionamiento del régimen de acumulación capitalista en el país ante los inveterados temores de la clase empresarial nacional.

Sobre este telón de fondo, es oportuno proyectar el escenario en que ha debido entrar el nuevo gobierno democrático:

4.1. *El escenario económico*

Para comprender adecuadamente la situación actual es necesario retrotraerse algunos años. Después de un período de vacilaciones, en 1984, cuando ya se extinguían las protestas sociales mencionadas, entró en funciones un nuevo equipo directivo económico encabezado por un brillante ingeniero civil y economista de la misma inspiración neoliberal del equipo económico original. Según la literatura especializada, había que enfrentar con urgencia tres problemas: 1) la renegociación y pago de la deuda externa (no contamos con datos fiables en esos años —hoy ésta asciende a 5.500 millones de dólares—); 2) la crisis del sistema financiero nacional, y 3) sobrevivencia a largo plazo de la economía de libre mercado.

La gestión económica en este período optó por una intervención directa del Estado para elevar el ahorro interno y la inversión, expandir las exportaciones e imponer restricciones (a los préstamos externos, al nivel de remuneraciones, controlar la inflación, etc.). El Estado tomó el control directo sobre los bancos y las sociedades financieras en peligro de quiebra. El ente estatal llegó a controlar un 64% del capital y reservas del sistema financiero privado y parte importante del sistema productivo relacionado con el mismo. Como lo indican los análisis económicos más dispares, apenas la crisis económica empezó a supe-

rarse el Estado de inmediato reprivatizó los bancos y empresas intervenidas. Algunas fueron compradas por clanes económicos nacionales e inversionistas extranjeros.

Hay consenso en que a partir de 1984 se produce una fuerte recuperación económica del país. El PIB crece a una media de un 5,4% anual. La tasa de inversión sube inmediatamente a un 12,9% y llega hasta un 18% del PIB. El desempleo cae hasta una tasa del 6,5%. Y el precio del cobre se mantiene favorable en 1 dólar y 60 centavos la libra. Sólo en 1989 hay un crecimiento del producto interno bruto de un 10%.

En este punto cabe mencionar un debate recientemente abierto entre dos visiones que señalan ciertos matices sobre el rendimiento económico del país y, más en particular, sobre la radicalidad de los cambios producidos y su proyección futura. La visión más arquetípica señala que se ha producido una recomposición fundamental del modo de funcionamiento de la economía chilena —asunto sobre el que hay consenso entre los expertos—, pero luego añade que incluso se ha producido una reestructuración industrial en tanto hoy en día el liderazgo sectorial ya no recae en el sector servicios, sino en la industria y en el agro. Se admite que hubo una verdadera debacle de la industria sustitutiva (textil, metalmecánica), pero se defiende que, como contrapartida, ha habido procesos de expansión en ramas de la industria alimentaria, química, madera, celulosa e industria relacionada con el cobre. Se sostiene, luego de un largo análisis de los argumentos que avalan la reordenación de la economía chilena: «En conclusión, se ha producido una fuerte articulación entre desarrollo exportador e industrialización, fenómeno que podría durar hasta principios de la década de 1990, algo parecido a lo ocurrido entre 1890 y 1910»¹². El *leit-motiv* de esta reflexión es que en Chile se habría generado una peculiar modernización autoritaria que se expresa en la puesta en práctica de dos procesos interrelacionados. Por un lado, la aplicación de una racionalización capitalista, entendida como la capacidad de las empresas para liberarse «de todo lastre, simplificando el proceso productivo, eliminando secciones, despidiendo trabajadores, vendiendo maquinaria innecesaria u obsoleta y reduciendo drásticamente inventarios»¹³. Así fundamentada se presenta la siguiente tesis: «A diferencia de Argentina, en Chile ya se han completado en lo esencial los procesos de racionalización, fenómeno contemporáneo a la desindustrialización. Dos crisis económicas (1974-75, 1981-83) y los cambios en el modo de regulación estatal de la economía, fueron los acicates»¹⁴.

Por otro lado, se ha verificado un marcado proceso de modernización tecnológica que comienza, de acuerdo a esta argumentación, a finales de la década de los setenta y se define en razón de tres rasgos básicos: 1) un ritmo de difusión muy desigual que ensancha la

¹² Alvaro Díaz, «La reestructuración industrial autoritaria en Chile», *Revista Proposiciones*, Ed. SUR, julio 1989, Chile, p. 21.

¹³ Alvaro Díaz, *op. cit.*, p. 24.

¹⁴ *Idem*, *op. cit.*, p. 24.

heterogeneidad tecnológica de la economía chilena; 2) un progreso notable de informatización de las empresas; 3) una notable innovación organizacional asociada a la computación que tiene un creciente impacto en los procesos productivos. En este sentido, un sociólogo de prestigio del país ha señalado en un texto reciente que las tendencias que han tenido lugar en Chile siguen muy de cerca el modo de reordenamiento mundial catalogado como «postfordista»¹⁵. Como lo indica una importante bibliografía, tal modelo de reorganización mundial implica entre otros procesos: la diversificación de la mano de obra —la emergencia de unos trabajadores de alta especialización—; el abandono del objetivo del pleno empleo; una cierta generalización de empleos más bien informales y atípicos; una creciente pero sostenida privatización del sector público, y una política social más bien enfocada a ciertos *target-groups*, etc.

Una visión más cauta señala los logros alcanzados y los valora muy positivamente, pero a renglón seguido sostiene que no existiría aún en Chile una consistente estrategia de desarrollo. Se menciona la altísima vulnerabilidad del sector externo y su carácter primario-exportador y por tanto regresivo en el medio plazo en los mercados internacionales. Se agrega que la economía chilena no ha pasado aún el test de mostrar una capacidad de crecimiento económico estable en el tiempo, junto con un desarrollo social adecuado. Se insiste también que ha existido un dramática disociación entre el proceso de modernización y la demora en la distribución de los beneficios a amplios sectores de la población. Al respecto se señalan enfáticamente, entre otros, los siguientes argumentos: «La diversificación de la oferta exportadora nacional no ha superado una característica básica del desarrollo histórico de la economía chilena: la dependencia de un conjunto reducido de recursos naturales que constituyen, más bien, ventajas estáticas [...]. Sólo cuatro áreas de actividad (minería, pesca, fruticultura y forestal), todas ellas directamente dependientes de los correspondientes recursos naturales, abarcan el 88% de las exportaciones totales en 1987»¹⁶. Y el actual Ministro de Hacienda también sostiene puntos de vista en esta misma línea, por ejemplo en torno al carácter modélico que se le adjudica al despegue de la economía chilena: «El modelo no aborda todavía el problema, bastante más complicado, de una estrategia de desarrollo hacia afuera que supone concentrar el esfuerzo y la preocupación en el

¹⁵ Eugenio Tironi, *Autoritarismo, modernización y marginalidad*, Ed. SUR, Chile, 1990.

¹⁶ Carlos Ominami y Roberto Madrid, «Chile: elementos para la evaluación del desarrollo exportador», *Revista Proposiciones*, Ed. SUR, enero 1990, Chile, p. 130. También de los mismos autores, *La inserción de Chile en los mercados internacionales*, Ed. CESOC, Chile, 1989; Alejandro Foxley, *Chile y su futuro. Un país posible*, Ed. Cieplan, Chile, 1987; Ricardo French-Davis y Oscar Muñoz, *Desarrollo económico, inestabilidad y desequilibrios políticos en Chile: 1950-1989*, Ed. Estudios Cieplan, n.º 28, Chile, 1990; Alejandro Jadresic, «Transformación productiva, crecimiento y competitividad internacional. Consideraciones sobre la experiencia chilena», en *Pensamiento Iberoamericano*, n.º 17, 1990, pp. 39-68.

único factor que realmente puede garantizar el éxito a largo plazo: el incremento sostenido y permanente de la productividad [...]»¹⁷.

4.2. *El escenario social*

La aplicación sistemática del conjunto de medidas de corte neoliberal descritas más arriba produjo transformaciones sustanciales en la estructura social del país. Aunque quizá no se pueda hacer una afirmación taxativa, se puede aducir que la trama de clases histórica sufrió un acelerado proceso de pauperización y diversificación de algunos sectores, sin que se pudiese hablar de la constitución de «nuevos» sectores sociales y grupos en sentido fuerte. Esto sí sucedió, por ejemplo, en el caso de Brasil, en donde emerge una nueva clase obrera al calor del proceso industrializador que impulsan los militares. En Chile en primer lugar se verifica una acusada decadencia de la clase media que vivió su edad de oro entre 1932 y 1970, fuertemente ligada al Estado y a la Universidad de Chile. El quiebre institucional de 1973 afectó duramente a este sector social, que se escinde en dos grupos: uno que logró reciclarse e incorporarse a la modernización, constituido por núcleos profesionales, pequeños empresarios de servicios, comerciantes que han tenido un acceso a un estilo de vida y consumo muy sofisticado. El otro, más numeroso, quedó totalmente desguarnecido de la protección que le otorgaba el Estado y entró en un franco proceso de empobrecimiento; se trataba de empleados o funcionariado estatal y todo el profesorado, tanto ligado a las universidades de mayor relevancia histórica —en particular la Universidad de Chile— como a las escuelas. Por ejemplo, en el sector público fueron eliminados 95.000 empleos en un lapso de seis años (1973 a 1979). Y durante todos los años del régimen militar, el Estado se redujo en 200.000 personas. A modo de contraste, en los treinta años previos a 1973 el empleo del Estado había crecido a un 3,8% anual, que constituía la tasa más alta de todos los sectores. Otro cambio que también afectó con rigor a este estrato social fue la creciente dualización que se produjo en el sistema educacional. La drástica reducción del gasto fiscal en educación le confirió un sesgo marcadamente elitista. De este modo, el gasto por alumno en la educación pública equivalía a mediados de los ochenta a un décimo del precio por alumno de un colegio privado pagado. También subieron enormemente los costos de la matrícula universitaria y de las carreras.

El otro gran actor de la escena política histórica chilena, el sindicalismo, sufre una merma y reducción considerable. En 1984, el peso

¹⁷ Alejandro Foxley, «La política económica para la transición», en Oscar Muñoz (comp.), *Transición a la democracia. Marco político y económico*, CIEPLAN, 1990, Chile, p. 106.

numérico de los trabajadores equivalía apenas a un tercio del que poseía en los años setenta. Y precisamente el contingente más afectado fueron las antiguas bases del sindicalismo nacional, que se desarrolló bajo la égida del denominado «estado de compromiso»; es decir, el proletariado industrial ligado a los sectores textiles, metalmecánicos, alimenticios, etc. Según la información disponible, se ha presentado de igual modo una tendencia a un relativo envejecimiento de la clase obrera. Como señala un estudio ya citado de Eugenio Tironi que recoge un conjunto de trabajos realizados en esta materia¹⁸, hacia 1971 los obreros jóvenes (entre 15 y 24 años) representaban un 72 y 56%, respectivamente, de los obreros del resto de los sectores productivos y de la industria. En contraste, al inicio de los años ochenta alcanzaban apenas un 54 y 36% del sector productivo en su conjunto. Por otra parte, otro de los efectos del modelo económico que se aplica consiste en una marcada acentuación de las heterogeneidades internas de la clase trabajadora. Gradualmente se van generando notables desigualdades salariales entre los obreros de las industrias pequeñas semi-industriales o artesanales, afectados duramente por la competencia de las exportaciones, y las industrias más de punta cuyos empleados y trabajadores perciben salarios relativamente privilegiados en relación a la media nacional. Junto a este antecedente se debe agregar el azote del desempleo, que contribuye a reducir aún más la capacidad de contestación del sindicalismo. Chile tenía como pauta histórica unos niveles de desempleo de no más del 6% de la fuerza de trabajo. Entre 1974 y 1987 la tasa de desempleo se disparó en promedio a un 20%; sólo en 1983, uno de cada tres trabajadores careció de empleo. Esto, a su vez, condujo a una enorme baja en las tasas de los trabajadores sindicalizados; en el mismo año (1983) había tres veces más desocupados que trabajadores sindicalizados. Como ya se ha indicado, con el correr del tiempo la desocupación ha experimentado una caída notable. Sin embargo, los empleos que se han generado son precarios, atípicos y en gran medida informales y no ocupaciones asalariadas tradicionales. En particular, hay un crecimiento notable de los trabajadores denominados «temporeros» que, como la palabra indica, es un fenómeno análogo al de los braceros mexicanos que se ocupan una parte del año en la recolección y embalaje de productos horto-frutícolas sin que cuenten, como sucede en Chile, con condiciones laborales realmente dignas, mecanismos de seguridad social y estabilidad en el empleo.

El corolario de la situación descrita ha sido la sostenida emergencia a lo largo de los últimos años de un sector informal de la economía, en la nomenclatura de PREALC (Programa Regional de Empleo para América-Latina y el Caribe, organismo internacional vinculado a las Nacio-

¹⁸ Javier Martínez y Eugenio Tironi, «La clase obrera en el nuevo estilo de desarrollo», *Revista Mexicana de Sociología*, 44, 2, México, 1982; Idem, *Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1980*, Ed. SUR, Chile, 1985.

nes Unidas), que se ha rotulado como la «irrupción de los marginales». Existe en la sociología de América Latina una larga tradición, que se remonta a la década de los sesenta, de estudios e intentos de conceptualización, desde diversos enfoques, del fenómeno social de la emergencia y crecimiento de un sector de la población que vive en condiciones extremadamente precarias, tanto en lo que se refiere al empleo como a la vivienda y que configuran los cinturones de pobreza de las urbes más importantes del continente. Este no es el lugar para abordar esta discusión. Lo que merece la pena destacar es cómo la modernización trajo consigo en Chile un agudo proceso de desalarización junto a lo ya indicado como una profunda segmentación del mercado de trabajo. Tironi señala al respecto: «Entre 1971 y 1984, el total de las categorías asalariadas se redujo en 16 puntos porcentuales, al tiempo que el número de desocupados, trabajadores marginales en comercio y servicios, empleadas domésticas y adscritos a los programas estatales de empleo de emergencia, aumentó 20 puntos»¹⁹. Para ilustrar la seriedad del problema con algunas cifras impresionistas, solamente en Santiago, 2,3 millones de personas —virtualmente la mitad de la población total de la región metropolitana— viven en los cinturones marginales. Así, el crecimiento del número de hogares en extrema pobreza subió del 17% en 1970 al 48,6% del total de la población a mediados de los ochenta. Por otro lado, una encuesta de 1988 reveló que el 44% de los pobladores (chabolistas en su acepción española) estuvo desempleado en los cinco años anteriores.

4.3. *El escenario político*

Como se ha demostrado en estudios de sistema de partidos que han sobrevivido bajo condiciones autoritarias por un período prolongado, los grados de continuidad de las lealtades políticas y la capacidad de mantención en algunos casos de una mínima y sólo simbólica estructura partidaria avalan la afirmación del profundo arraigo que alcanzan —a nivel de mentalidades y percepciones profundas en torno a la política— identidades políticas determinadas. A este respecto, Chile no ha sido la excepción. A pesar del particular encono desplegado para «borrar» del mapa político tanto a los partidos de izquierda como de centro, éstos lograron perdurar y aun reproducirse vicariamente en condiciones extremadamente hostiles. Esto se puede apreciar, aunque sea en forma muy somera, describiendo el resultado electoral del espectro político del país en las elecciones parlamentarias, considerando que la ley electoral premia a los partidos de mayor envergadura. El efecto directo de esta legislación fue que la oposición democrática tuvo que pactar con gran detalle, y establecer una mutua cesión de escaños parlamentarios para maximizar la votación, lo cual, por cierto, hizo

¹⁹ Eugenio Tironi, *op. cit.*, p. 168.

que no se reflejaran adecuadamente las identidades y la plena capacidad de representación de cada partido. La derecha se presentó como coalición en sus dos componentes más importantes. La Unión Demócrata Independiente, más apegada al régimen militar y a la figura de Pinochet, y Renovación Nacional, de corte más modernizante y preocupada por «cambiar de imagen» y mostrar credenciales democráticas, configuraron la colación Democracia y Progreso. Lograron un 33,35% en la elección de diputados y un 35,4% en la elección de senadores. En general, la derecha tiene como límite probable entre un cuarto y un tercio del electorado.

El centro político, es decir, la Democracia Cristiana, que supera su tendencia histórica de «camino propio» y opta por una alianza perdurable con un sector clave de la izquierda, obtiene la primera mayoría relativa en las elecciones parlamentarias. En diputados obtiene un 26,14% de los votos y sube hasta un 32% en senadores. Una parte de la izquierda se presenta —debido a las restricciones legales aún vigentes— como Partido por la Democracia, cuyo eje central es un sector del Partido Socialista, que realiza una profunda crítica de su quehacer pasado y emprende una renovación ideológica global, y se compromete firmemente con el régimen democrático. Otro sector de la izquierda, básicamente el Partido Comunista y un sector ortodoxo del Partido Socialista que aún permanece en la matriz clásica marxista, se presenta a las elecciones como Partido Amplio de Izquierda Socialista. Este último conglomerado, que se congrega bajo el rótulo de «Unidad para la Democracia», obtiene un 5,31% de votos en diputados y un 4,24% de votos para senadores. Por otra parte, el Partido por la Democracia, que se integra en la Concertación de Partidos por la Democracia, logra el 10,98% en la votación para diputados y el 11,9% de la votación para senadores. Aunque muy por debajo de la Democracia Cristiana, este partido se convierte en el segundo partido de la concertación y en el tercero en representación parlamentaria del país. Una vez que el Partido Socialista se reunifica tras las elecciones, se consolida como segunda fuerza política en la coalición de gobierno, obteniendo seis ministerios del primer gabinete. *Grosso modo*, se puede concluir este apartado señalando que el sistema partidario mantiene sus lealtades y referentes clásicos, pero más bien con una tendencia a la constitución (como acertadamente lo ha señalado Manuel Antonio Garretón) de un entramado partidario de cuatro polos en vez de los tres tercios históricamente enfrentados²⁰. Tal aseveración se sintetiza en los siguientes aspectos: 1) Un primer polo constituido por una derecha escindida; un sector de ella heredera del autoritarismo, e incluso de la figura de Pinochet, *versus* una derecha que busca modernizarse afanosamente y declara una firme adhesión al régimen democrático. 2) Un segundo

²⁰ Manuel Antonio Garretón, «Partidos políticos, transición y consolidación democrática», *Revista Proposiciones*, enero 1990, Ed. SUR, Chile. Un análisis complementario con datos desagregados se encuentra en Rodrigo Baño, «Elecciones en Chile: ¿Otra vez lo mismo o al revés??», en la *REIS*, n.º 50, abril-junio 1990.

polo representado por la Democracia Cristiana que oscila entre un retorno a su viejo hábito de «camino propio» o decidirse sin ambigüedades por el establecimiento de una alianza a largo plazo con la izquierda socialista. 3) Un tercer polo expresado en el Partido Socialista ya unificado, cuyo desafío es convertirse en una fuerza política plenamente moderna, programática y autónoma tanto del centro político como de la izquierda comunista. 4) Por último se encuentra la izquierda comunista. Su disyuntiva es si enarbola definitivamente una política radical protestataria de pura reivindicación y expresividad ética o se subordina a la hegemonía de la izquierda socialista.

5. ULTIMO MOVIMIENTO: LOS NUDOS GORDIANOS DE LA POLITICA Y LA SOCIEDAD EN CHILE

¿Qué comparación preliminar se puede establecer entre la experiencia sociopolítica chilena y la de los países del sur de Europa (Grecia, Portugal, España)?²¹ En términos generales, es claro que estos tres países tuvieron regímenes autoritarios más bien de corte patrimonial, en donde se llevan a cabo modernizaciones económicas muy tardías y de efectos limitados. No cabe ninguna duda que el régimen militar chileno tenía un carácter misional y, como se ha argumentado, la pretensión muy marcada de «fundar» una nueva sociedad. En suma, se trató de una dictadura modernizante que desarma radicalmente el antiguo Estado de Bienestar chileno y reordena a la sociedad sobre bases económicas distintas.

Por otra parte, se pueden establecer algunos contrastes elementales en los procesos de recomposición democrática. Los tres países sureuropeos se ven obligados, merced a una ingente crisis económica, a realizar de modo variado una política de ajuste y recomposición industrial para poner las economías más a tono con su entorno europeo. Simultáneamente, estos países han debido enfrentar enormes desafíos, en términos de construir un Estado de Bienestar que recoge las largas experiencias de otros contextos europeos, en un período de crisis y reordenamiento de este mismo esquema estatal, junto con la creación de sociedades civiles fuertes. Es decir, el fomento e impulso de una genuina ciudadanía social, cultural, política, etc., de relativo escaso arraigo en estos países. Si volvemos al caso chileno, la inauguración democrática tiene como *surplus* que el gobierno tiene en verdad resuelta, como reflejan sus indicadores centrales, la situación económica, y no necesita elaborar un modelo de reconversión económica, sino más bien buscar formas más rápidas y eficaces de lograr una efectiva redistribución hacia los sectores más desfavorecidos.

²¹ Jose María Maravall, *Economic reforms in new democracies: the southern european experience*, Estudios/Working Papers, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1991, n.º 22, Madrid, España.

Si bien existe una larga tradición previa, también está presente en Chile el desafío de reorganizar una suerte de Estado de Bienestar, que ha sido la tremenda ausencia de todo el período autoritario. Sin embargo, en contraste con la fuerte demanda existente en el sur de Europa y la respuesta de los gobiernos de concentrar gastos de envergadura en el área social, en Chile, a la luz de los bajos umbrales a que se llegó en esta materia, las expectativas de la población no son extremadamente altas, ni el gobierno tiene la intención de realizar en este área gastos realmente significativos, por lo menos en este primer gobierno. Si nos detenemos, por último, en la dimensión ciudadana, Chile, como ya se ha argumentado extensamente, cuenta con una larga tradición democrática de participación y compromiso cívico de la población que tiene que ser reactivada. De igual modo, el desafío, como en los casos del sur de Europa, estriba en crear una sociedad civil autónoma y, en particular en Chile, no tan dependiente e imbricada con la trama de partidos políticos.

A la luz de esta rápida comparación, es interesante finalizar esbozando esquemáticamente algunos de los retos que enfrenta Chile hacia el futuro.

En primer lugar, está el imperativo por fortalecer —recogiendo los debates actuales— la capacidad directiva y de gestión del Estado que la exagerada obsesión neoliberal terminó prácticamente por disolver. El ente estatal debe recuperar un lugar decisivo, como lo han demostrado todas las experiencias de capitalismo tardíos exitosos, en el ámbito de fomentar el desarrollo y ser un activo agente de democratización y modernización de la sociedad. En esta línea, es crucial lograr niveles crecientes de diversificación de la sociedad que se refieren, entre otros órdenes, a la creación de espacios reales de participación y poder a nivel local, territorial y en la esfera del trabajo. Una condición *sine qua non* para lo anterior es la necesidad de llevar a cabo una plena democratización y modernización interna de los partidos políticos. Estos deben transformarse de ser organizaciones autocentradas de un monolitismo ideológico exagerado a expresiones políticas de corte más programático y con lazos más fluidos y abiertos con la sociedad.

En segundo lugar, está la tarea de establecer un nuevo modelo de relaciones entre civiles y militares. Se debe pasar de un modelo de enclaustramiento o no reconocimiento pleno de ambos estamentos, como sucedió en el pasado, a un modelo de mutuo reconocimiento e intercambio.

En tercer lugar, se deben consolidar los procesos políticos ya en curso que han presentado en el último período señales contradictorias, tendentes a lograr una concertación sociopolítica a largo plazo entre el centro político y la izquierda, que aparece como la llave maestra de la consolidación democrática. Una de las condiciones para ello es realizar una reforma del sistema político en donde se instaure un régimen semipresidencial para otorgarle espacio tanto al centro como a la izquierda como a la derecha y lograr un diálogo más flexible en la arena

parlamentaria, de tal modo que no se sature en exceso la figura del Presidente de la República.

Por último —*last but not least*—, la democracia chilena debe pasar el test de lograr integrar bajo los más diversos mecanismos a crecientes sectores sociales. No es casual que hoy día haya vuelto como un fantasma del pasado la discusión sobre la marginalidad en América Latina. En particular, es de primera importancia saber educar en las rutinas democráticas a las nuevas generaciones, que son el capital humano irremplazable para la afirmación y despliegue del ideal democrático-progresista en nuestros países.